CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

José Luis Terán Suárez Román, con cédula de ciudadanía número 1001335445, en mi calidad de procurador común de los accionantes en la acción de protección No. 17160-2020-00272, presentada por los exjueces, juezas, conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia, **dentro de la acción extraordinaria de protección No. 653-22-EP** presentada por Jaime Pozo González, en su calidad de subdirector Nacional de Patrocinio y delegado del director general del Consejo de la Judicatura, comparezco ante ustedes con el siguiente escrito:

I. Calidad de la comparecencia

1. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante “LOGJCC”) establece que pueden intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como parte coadyuvante del accionado *“cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la acción constitucional”*.
2. El presente caso se presenta en contra de la sentencia de segunda instancia del proceso por acción de protección No. 17160-2020-00272 de la cual nosotros fuimos accionantes. La autoridad demandada, el Consejo de la Judicatura pretende, mediante esta acción dejar sin efecto la decisión de la Corte Provincial de Pichincha por la cual se reconoció la violación de nuestros derechos humanos y se estableció las medidas de reparación integral a nuestro favor.
3. En tal sentido, tenemos un interés directo en la decisión impugnada que motivó esta acción, por lo que nos encontramos legitimados para intervenir en este proceso, a través del presente escrito.

II. Antecedentes de la acción de protección No. 17160-2020-00272

4. El 12 de mayo de 2020, José Luis Terán Suárez Román por sus propios derechos y en calidad de procurador común de Royer Francisco Cusme Macías, Marco Antonio Maldonado Castro, Rosa Beatriz Suárez Armijos, María Del Carmen Espinoza Valdiviezo, María Rosa Merchán Larrea, Edgar Wilfrido Flores Mier, Julieta Magaly Soledispa Toro, Luis Antonio Cando Arévalo, Luis Manaces Enríquez Villacrés, Juan Gonzalo Montero Chávez, Pablo Joaquín Tinajero Delgado, Sylvia Ximena Sánchez Isuasti, Miguel Antonio Jurado Fabara, Cyntia María Guerrero Mosquera, Ana María Crespo Santos, María Teresa Delgado Viteri, Richard Ítalo Villagómez Cabezas, Rómulo Darío Velástegui Enríquez y María Alejandra Cueva Guzmán, presentamos una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura alegando la vulneración a nuestros

derechos constitucionales al ser destituidos el 15 de noviembre de 2019 de nuestras calidades de jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia en el proceso de evaluación de dicho organismo. El proceso fue signado con el No. 17160-2020-00272.

5. En la citada acción de protección, los exmagistrados y magistradas presentamos argumentos de hecho y de derecho que demuestran una amplia gama de violaciones de derechos constitucionales, enmarcados en el Proceso de Evaluación y nombramiento de Jueces de la Corte Nacional de Justicia.
6. El 2 de julio de 2020, la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco (en adelante Unidad Judicial) negó la acción de protección. En contra de esta decisión, presentamos recurso de apelación.
7. El 30 de diciembre de 2021, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (en adelante Corte Provincial) aceptó parcialmente el recurso de apelación y ordenó medidas de reparación integral¹.

¹ Sentencia de 30 de diciembre de 2021. “DÉCIMO SEGUNDO: RESOLUCIÓN.- Por las consideraciones expuestas en esta sentencia, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: Acepta parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto [...] En calidad de medidas de reparación integral se dispone: 12.1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ante la imposibilidad de poder ordenar la restitución de los legitimados activos a sus cargos originados en concursos de méritos y oposición e impugnación ciudadana, debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas, se dispone como medida de reparación económica el pago de la remuneraciones más los beneficios de ley, en base al debido proceso en el derecho a la inmovilidad de los Jueces y Conjuces elegidos para un periodo fijo, más aún cuando, esta sentencia tiene efectos subjetivos que evidencian las trasgresiones de derechos de los cuales han sido objeto cada uno de los legitimados activos, como queda advertido de los hechos aportados y analizados del libelo de la demanda de Acción Constitucional de Protección, que no generan efectos contradictorios a fallos de inconstitucionalidad respecto de reglamentos o resoluciones de orden general.

12.2. En tal sentido, será la jurisdicción contencioso-administrativa, la que determine la reparación respecto de los legitimados activos, tomando en cuenta como parámetros para su fijación: a) la remuneración percibida al momento de la remoción más los correspondientes beneficios de ley que han dejado de percibir; y, b) los periodos fijos que les correspondía a cada uno en sus cargos, según establece el artículo 182 de la Constitución.

12.3. Si los legitimados activos, durante el tiempo posterior a la remoción hasta el momento de la ejecución de este fallo hubieren obtenido ingresos provenientes del sector público, los mismos deberán ser deducidos del monto total de la reparación económica.

12.4. Para el efectivo cumplimiento de esta reparación económica, cada uno de los legitimados activos, podrá demandar en cuerda separada ante el Tribunal Contencioso Administrativo según lo dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

8. Tanto el Consejo de la Judicatura como la Procuraduría General del Estado solicitaron aclaración y ampliación de la sentencia. El 7 de febrero de 2022, la Corte Provincial aceptó parcialmente los pedidos de aclaración y ampliación y negó en todo aquello que consideró improcedente².

12.5. Como medidas de reparación inmaterial se dispone que:

a) El legitimado pasivo presente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que incorpore la metodología y el desarrollo de los parámetros cualitativos, cuantitativos, legitimidad y transparencia, por cada materia y cargo para la evaluación integral de Jueces, funcionarios judiciales y funcionarios administrativos de la Función Judicial de manera pormenorizada, que puede ser mediante Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, de igual manera deberá plantear una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la cual se establezca la creación de jueces especializados en materia constitucional tanto de primer nivel cuanto las Salas respectivas en las Cortes Provinciales de Justicia, para una celeridad y eficiente prestación de este servicio en garantía de los ciudadanos y su derecho a la tutela judicial efectiva. b) El legitimado pasivo presente las correspondientes disculpas públicas en los medios de comunicación nacional por la flagrante vulneración de derechos constitucionales a los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia que fueron removidos por este proceso de evaluación violatorio. c) Se haga conocer de este fallo mediante atenta comunicación física y electrónica, por medio de Secretaría del Tribunal de la Sala, a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados con la decisión adoptada, solicitándoles que se mantengan vigilantes de la ejecución de esta sentencia, así como de eventuales retaliaciones que el Consejo Nacional de la Judicatura pueda tomar en contra de los accionantes, así como de los jueces que resuelven la presente causa. d) Se publique por noventa (90) días en la página web oficial del Consejo Nacional de la Judicatura este fallo, así como se haga conocer a todos los usuarios del correo electrónico institucional de su contenido. Del cumplimiento de las presentes disposiciones se encarga a la señora jueza a quo, a quien se deberá informar documentadamente de la ejecución de lo señalado en el pazo máximo de 90 días a partir de la notificación del fallo”.

² Auto de aclaración y ampliación de 7 de febrero de 2022. “[...] **PRIMERO.- En relación a la petición formulada por el Consejo de la Judicatura (CJ)**, se debe indicar lo siguiente: [...] **2.6.-** En relación a la temporalidad del proceso de evaluación se pide ampliar la sentencia en razón de que no se habría considerado que el Consejo de la Judicatura emitió el Reglamento para el proceso de evaluación de los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia, a través de la Resolución No. 010-2019 de conformidad con el exhorto (con fuerza mandatoria proveniente de la voluntad del pueblo soberano, expresada en consulta popular de 04 de febrero de 2018), en concordancia con la normativa constitucional y legal que establece la competencia de dicha Institución para realizar las evaluaciones a los diferentes funcionarios judiciales. La Corte Constitucional en su sentencia en el Caso 37-19-IN de 21 de diciembre de 2021, declaró la inconstitucionalidad por el fondo, de la Resolución No. 010-2019 del Consejo de la Judicatura, expedida para el proceso de evaluación detallado de manera reiterada en líneas precedentes, entre otras consideraciones, por haberse efectuado antes de tiempo, en el período de tres años que correspondía hacerlo, es decir en el año 2021. La posibilidad de ejercer una evaluación por muestreo ante la existencia de irregularidades o problemas por denuncias reiteradas con alguna servidora o servidor de la Función Judicial, desatendiendo la periodicidad, según prevé el Art. 88 del COFJ, no ha sido demostrada procesalmente, por tanto, no pasa de ser un enunciado teórico, ya que el Consejo de la Judicatura no ha probado denuncias reiteradas, problemas o irregularidades de los accionantes, que hayan ocasionado una evaluación por muestreo,

9. El 8 de marzo de 2022, Jaime Pozo González, como subdirector nacional de patrocinio y delegado del director general del Consejo de la Judicatura, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 30 de diciembre de 2021.

III. Sobre las alegaciones respecto del derecho al debido proceso en la garantía de motivación

esta fue general, a todos los señores jueces y conjueces de la Corte Nacional. No está en discusión la facultad constitucional y legal del Consejo de la Judicatura para efectuar las evaluaciones periódicas, sino la oportunidad y observancia del debido proceso y los derechos constitucionales de los evaluados. De esta manera se amplía lo solicitado [...]

2.8.- El Consejo de la Judicatura solicita ampliar la sentencia en relación a que se deberá enviar un proyecto a la Asamblea Nacional, que incorpore los parámetros cualitativos, cuantitativos, de legitimidad y transparencia por cada materia y cargo para la evaluación integral de jueces y funcionarios judiciales, de manera pormenorizada, ya que sostiene que las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que entraron en vigencia el 08 de diciembre de 2020 tiene lineamientos para el efecto; además indica, que es el Consejo de la Judicatura al que corresponde determinar las normas técnicas, métodos y procedimientos de las evaluaciones. Sobre este punto es necesario indicar lo siguiente: i) Lo antedicho es parte de la reparación inmaterial dispuesta, que se prevé como facultad del juez constitucional al establecer la vulneración de derechos de los ciudadanos accionantes, según lo faculta el artículo 86.3 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 18 de la LOGJCC; tiene como objetivo la garantía de que hechos de similar naturaleza no se repitan, y se incorporen en la normativa legal (COFJ) todos los detalles de los procesos de evaluación, evitando modificaciones en el curso del proceso evaluatorio y por ende creando inseguridad jurídica, garantizando el imperio de la legalidad y la sujeción a un debido proceso. ii) No se halla en discusión que el Consejo de la Judicatura es el órgano que debe dirigir el proceso de evaluación, elaborar las normas técnicas, métodos y procedimiento de las evaluaciones, sino la necesidad de que aquellos lineamientos, parámetros, metodología, de manera sucinta y clara queden plasmados en la normativa legal, generando de esta manera seguridad jurídica. Además la Constitución en su artículo 134 otorga iniciativa para presentar proyectos de ley a las otras funciones del Estado en el ámbito de su competencia, norma que guarda armonía con lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, la Función Judicial está legitimada para presentar proyectos de ley en el ámbito de su competencia, en temas como la evaluación de jueces y funcionarios judiciales. Con lo manifestado se amplía lo solicitado. [...]

SEGUNDO.- En relación al requerimiento de ampliación y aclaración propuesto por la Procuraduría General del Estado (PGE). [...] **2.2.-** Sobre el pedido de ampliar la sentencia indicando cuál es el fundamento fáctico y jurídico con el cual se emite la disposición contenida en el número 12.5, respecto al envío de un proyecto de ley que introduzca en el COFJ, todos los aspectos relacionados a la evaluación de jueces y servidores judiciales, se encuentra desarrollado y respondido en el número 2.8 del considerando primero de este auto, que atiende similar solicitud del Consejo Nacional de la Judicatura. [...] En virtud del análisis que precede, este Tribunal RESUELVE, aceptar parcialmente los pedidos de aclaración y ampliación formulados por los legitimados pasivos Consejo de la Judicatura y Procuraduría General del Estado, en los términos establecidos en esta resolución; así como, negarlos en todo aquello que en el texto contenido ut supra han sido señalados como improcedentes. Notifíquese y cúmplase”.

10. Entre las páginas 7 y 16 de la demanda, la entidad accionante presenta alegaciones sobre la garantía de motivación. Concretamente alega que la decisión impugnada tiene deficiencia motivación por insuficiencia, incongruencia, e inatinencia.
11. Por encontrarse dentro de esta fase procesal, la Sala de Admisión debe comprobar si la demanda cumple con los requisitos formales o incurre en los casos determinados en el artículo 62 de la LOGJCC para admitirla o no. Por estos motivos, nos permitimos exponer, para mejor resolver por parte de la instancia correspondiente, los siguientes argumentos por los cuales consideramos que la demanda debería ser inadmitida.

a. Consideraciones previas

12. En primer lugar, el artículo 62 numeral 1 de la LOGJCC establece como requisito de la demanda: “1. *Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso*”. Al respecto, en la Sentencia No. 1967-14-EP/20 la Corte estableció una forma de analizar dicho requisito, es decir que una argumentación es completa si reúne, al menos, los siguientes elementos:

*“18.1. **Una tesis o conclusión**, en la que se afirme cuál es el derecho fundamental cuya vulneración se acusa (el "derecho violado", en palabras del art. 62.1 de la LOGCC).*

*18.2. **Una base fáctica** consistente en el señalamiento de cuál es la "acción u omisión judicial de la autoridad judicial" (referida por el art. 62.1 de la LOGCC) cuya consecuencia habría sido la vulneración del derecho fundamental. Tal acción u omisión deberá ser, naturalmente, un aspecto del acto judicial objeto de la acción.*

*18.3. **Una justificación jurídica** que muestre por qué la acción u omisión judicial acusada vulnera el derecho fundamental en forma "directa e inmediata" (como lo precisa el art. 62.1 de la LOGCC)” (Énfasis añadido).*

13. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha reiterado que una acción que se justifica en lo injusto o equivocado de la decisión, de conformidad con el artículo 62 numeral 3 de la LOGJCC, no puede ser admitida a trámite³. Por otro lado ha señalado que no le corresponde analizar alegaciones dirigidas a cuestionar la correcta o incorrecta aplicación e interpretación de normas infraconstitucionales, sino verificar la inobservancia del ordenamiento jurídico por parte de la autoridad judicial que acarree

³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1162-12-EP/19, párrs. 48 y 49. Ver también: Sentencia No. 1097-12-EP/19, párr. 43.

la afectación a preceptos constitucionales⁴ a la luz del artículo 62 numeral 4 de la LOGJCC. De igual manera, sobre los fundamentos relacionados con la apreciación de la prueba ha especificado que se trata de un asunto ateniendo a la sana crítica de la jueza o juez sobre las pruebas actuadas por las partes y escapa del ámbito de la acción extraordinaria de protección en virtud del artículo 62 numeral 5 de la LOGJCC⁵.

14. Finalmente, cabe recordar que la Sentencia No. 1158-17-EP/21 estableció que el cargo de vulneración a la garantía de motivación ***“expresa las razones por las que una argumentación jurídica no consigue tener una estructura mínimamente completa, integrada por una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente”***⁶.
15. En virtud de lo expuesto, al ser la única garantía cuya vulneración alega la entidad accionante, se procederá a analizar los cargos expuestos en dicho sentido para demostrar cómo la demanda del Consejo de la Judicatura no cumple los requisitos e incurre en las causales establecidas en el artículo 62 de la LOGJCC.

b. Sobre los cargos que sostienen la insuficiencia de la motivación

16. En primer lugar, el Consejo de la Judicatura sostiene que en la sentencia impugnada, de conformidad con la Sentencia No. 37-19-IN, correspondía *“realizar el análisis de los presuntos derechos vulnerados específicos que pudieran producirse en casos concretos, es decir determinar con exactitud cómo, cuándo y en qué etapa del procedimiento de evaluación, el Consejo de la Judicatura vulneró los presuntos derechos de cada uno de los accionantes durante el proceso de evaluación; sin embargo no lo hizo y solo de una forma general e insuficiente, en la sentencia se refirió a la vulneración del derecho a la igualdad de uno de los conjueces quien tenía una discapacidad”*.
17. Frente a lo anterior, especificó que solicitó aclaración y ampliación y detalla la respuesta otorgada por la Corte Provincial. En tal virtud, insiste en que ni en la sentencia ni en el auto y señala que *“correspondía es pronunciarse de forma específica respecto de que derecho constitucional fue vulnerado y cómo es que se produjo dicha vulneración para cada accionante”*.

⁴ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1593-14-EP/19, párr. 19. Ver también: Sentencia No. 1851-13-EP/19, párr. 28.

⁵ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 761-12-EP/19, párr. 27. Ver también: Sentencia No. 1361-10-EP/19, párr. 32.

⁶ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21, párr. 65.

18. De tal manera, sostiene que existió una motivación insuficiente porque *“no se realizó por parte del juzgador, el análisis de los presuntos derechos vulnerados específicos que pudieran producirse en cada uno de los casos de los accionantes, es decir, no determinaron con exactitud cómo, cuándo y en qué etapa del proceso de evaluación, el Consejo de la Judicatura vulneró los presuntos derechos de cada uno de los accionantes”*.
19. De lo expuesto, se obtiene que, si bien se vincula una supuesta vulneración a la garantía de motivación con una aparente omisión por parte de la autoridad jurisdiccional, el fundamento del mismo se agota en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que cada uno de los ex magistrados y magistradas actuaron en un mismo proceso, por cuanto los efectos de las decisiones del Consejo de la Judicatura fueron similares. La propia Constitución de la República establece que los derechos se pueden ejercer individual o colectivamente (art. 11.1) y que las garantías jurisdiccionales pueden ser presentadas por personas o grupos de personas (art. 86.1).
20. Concretamente, la entidad accionante reiteradamente indica que no se analizaron los presuntos derechos vulnerados específicos respecto de cada accionante. Sin embargo, de la lectura de la decisión impugnada se puede observar claramente que la Corte Provincial se pronunció sobre la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, la garantía de inamovilidad de los jueces y el derecho a la igualdad y no discriminación⁷ en el contexto del

⁷ Sentencia de 30 de diciembre de 2021. **“Una vez que se ha fijado los medios de prueba que han sido presentados y practicados por las partes: accionante y la entidad demanda, corresponde establecer los problemas jurídicos a resolver: 1. ¿El proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 vulneró el derecho a la seguridad jurídica? [..]** En el sub iudice, corresponde a este Tribunal establecer la forma en que operó la seguridad jurídica en relación con el proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. [...] De esta forma, la entidad accionada transgredió la dimensión de la certeza como elemento de la seguridad jurídica que poseían los evaluados. [...] este Tribunal considera que el Reglamento de Evaluación no es anterior a la realización del proceso, tratándose de normas no previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, reglas que luego fueron modificadas en el decurso del proceso alterándose las condiciones de certeza que configuran la seguridad jurídica, evidenciándose la alteración del instructivo para la designación y funcionamiento del comité de expertos y del comité evaluador. [...] En suma, la inobservancia y modificación de las Resoluciones emitidas por la entidad accionada para establecer las pautas del Proceso de evaluación de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia fue modificada ex post, es decir en el decurso del proceso de evaluación, vulnerándose el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador [...] Por otra parte, los procesos de evaluación de los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia deben efectuarse de manera coincidente con los períodos de renovación parcial previstos en el Art. 182 la CRE, cada tres años, respetando el período fijo para el cual fueron designados, hacerlo de manera anticipada,

problema jurídico analizado, es decir si en el “Proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019” se vulneraron derechos constitucionales.

21. Además, no se contempla en los fundamentos algún aspecto que ataque la suficiencia motivacional en garantías jurisdiccionales, como la falta de verificación de la existencia o no de vulneraciones a derechos⁸. El alegato del Consejo de la Judicatura, en este sentido, únicamente refleja su inconformidad con la decisión impugnada.

en el sub examine en el año 2019, cuando el período de renovación correspondía al año 2021, constituye una evidente vulneración de la seguridad jurídica, en perjuicio del accionante. Se genera además una afectación subjetiva a cada uno de los señores ex Jueces y Conjueces, que debe ser analizada en la sede jurisdiccional pertinente y en el momento oportuno, ya que siendo el período establecido en la Constitución de nueve (9) años, es la norma que de manera primigenia debe observarse, en función del año y período en que se fueron integrando a sus funciones los magistrados. [...] **2. ¿El proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 vulneró el derecho al debido proceso en su garantía a la inamovilidad de los Jueces y Conjueces elegidos para un período fijo, denominado principio de independencia judicial?** [...] En el caso concreto, la entidad accionada mediante el Proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 vulneró el derecho al debido proceso; la independencia judicial y la inamovilidad de los Jueces y Conjueces elegidos para un período fijo. [...] El análisis realizado en el Proceso de Evaluación respecto de las decisiones jurisdiccionales ya sean autos de admisión o sentencias de fondo de casación mediante sustentaciones orales de los casos juzgados, comprometen la independencia de los Jueces y Conjueces dentro del marco normativo que regula el ejercicio de sus funciones atribuidas mediante la Constitución de la República del Ecuador y la Ley. [...] or ello, se concluye que los parámetros de la evaluación contrariaron de forma directa a los pronunciamientos realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al disminuir las puntuaciones de los evaluados con base en el número de procesos que mediante acción extraordinaria de protección (irresoluta) fueron a la Corte Constitucional. [...] Por tanto, conforme el razonamiento fundado que precede, este Tribunal concluye que el Proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 vulneró el derecho al debido proceso en su garantía a la inamovilidad de los Jueces y Conjueces elegidos para un período fijo, denominado principio de independencia judicial. [...] **3. ¿El proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación?** [...] Con el fundamento que precede, aplicado al caso concreto, se establece que se ha transgredido de forma expresa por la entidad accionada el derecho a la igualdad al no existir ninguna constancia documental en braille que permita justificar que el evaluado Roger Francisco Cusme Macías recibió dichas comunicaciones de forma eficaz. [...] Por ello, este Tribunal concluye que Proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019, no comportó la característica de inclusivo, por el contrario se ha discriminado y hasta excluido al evaluado Roger Francisco Cusme Macías al hacer caso omiso a sus oficios en los que requirió se tome en cuenta la forma de las notificaciones a partir de su condición de vulnerabilidad y la necesidad de que se efectúe mediante usos alternativos de la comunicación, creándose en ausencia de un intérprete dotado por la entidad accionada, una dependencia de su cónyuge para acceder a la información y las distintas etapas del proceso de evaluación, afectándose el derecho a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de Roger Francisco Cusme Macías.”.

⁸ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21, párr. 103.

Incluso, respecto con la supuesta falta de análisis de cada una de la situación de los accionantes, la Corte Provincial reconoció que, para efectos de la reparación, se deben considerar la situación específica de cada uno. Esto, sin duda alguna, en el contexto de la acción de protección, era lo procedente.

22. Resulta además absurdo y contrario a los principios de la administración de justicia constitucional -como el de economía procesal determinado en el artículo 4 numeral 11- que el Consejo de la Judicatura pretenda que en casos en donde grupos de personas sean víctimas de violaciones de derechos fundamentales se inicien procesos individuales o en una sentencia se copie y pegue veinte veces (como es el presente caso) los argumentos que son válidos para los veinte accionantes que fueron afectados por un mismo acto y se encontraban en la misma situación jurídica.
23. Por los motivos expuestos, estos cargos incurren en el numeral 3 del artículo 62 de la LOGJCC, y por tanto vuelven inadmisibles a la acción.

c. Sobre los cargos que sostienen la incongruencia de la motivación

24. El Consejo de la Judicatura sostiene que la sentencia impugnada contiene tergiversaciones en el apartado Undécimo. Concretamente, indicó que la Constitución establece sus competencias, entre ellas la potestad normativa reglamentaria, razón por la cual emitió aquellas relacionadas con el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional. En tal sentido, insiste en que la Corte Provincial “*tergiversando los argumentos esgrimidos por el Consejo de la Judicatura, manifiesta que se inobservó y modificó las resoluciones vulnerándose la seguridad jurídica; lo cual, incluso en el auto de 7 de febrero de 2022, fue ratificado*”.
25. En cuanto a este cargo, cabe señalar que el artículo 62 numeral 1 de la LOGJCC señala que el argumento claro se lo debe realizar “*con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso*”. Conforme se ha observado, la entidad accionante fundamenta el supuesto vicio de incongruencia debido a que contaba con la competencia para emitir las normas reglamentarias que fueron objeto de análisis en la acción de protección. Con lo cual, incumple el mencionado requisito.
26. Sin perjuicio de lo anterior, lo expuesto por el Consejo de la Judicatura también incurre en el artículo 62 numeral 5 de la LOGJCC debido a que cuestiona con calificativos -tergiversación- el análisis realizado por la autoridad judicial sobre las resoluciones impugnadas dentro de la acción de protección.

27. Por otro lado, la entidad accionante alega que la autoridad jurisdiccional no contestó sobre el período en que se debe establecer el cálculo de la reparación económica. Al respecto, señala que tanto en la sentencia como en el auto que atendió su pedido de aclaración y ampliación *“de una forma general se manifiesta que los jueces y conjuces son designados para un período de nueve años y que se renovaron por tercios cada tres años, sin embargo, más adelante manifiestan que la situación de cada uno de los accionantes es única y subjetiva en lo concerniente a la época y fecha de ingreso a sus funciones; pero no se aclara respecto a que si el pago es por los nueve años o por el tiempo que les faltaba a cada reclamante para cumplir tres años en funciones”*.
28. Sobre este cargo, cabe señalar igualmente que incurre en el artículo 62 numeral 3 de la LOGJCC debido a que únicamente manifiesta su inconformidad con la decisión adoptada haciéndola aparentar como un supuesto vicio de incongruencia. En un primer momento, señala que no se atendió su pedido de aclaración y ampliación y posteriormente señala que sí se lo atendió, pero no de forma favorable a sus intereses. Al respecto, cabe señalar que la Corte Constitucional ha establecido que el acceso a la justicia no implica necesariamente que la respuesta judicial sea favorable a la pretensión o a los intereses de las partes procesales⁹.
29. Por estos motivos, el cargo se agota en lo injusto o equivocado que estuvo la decisión para la entidad accionante y no en la incongruencia argumentativa.

d. Sobre los cargos que sostienen la inatinencia de la motivación

30. El Consejo de la Judicatura sostiene la inatinencia de la motivación debido a que la Corte Provincial *“equivoca el punto de la controversia judicial, pues no puede hablarse jamás que por el hecho de llevarse a cabo un procedimiento de evaluación, el cual se encuentra previamente normado [...] se vulnera la independencia judicial de quien no supera dicha evaluación”*.
31. De igual manera, señala que la sentencia impugnada incurre en dicho vicio debido a que *“jueces y conjuces fueron evaluados respecto de autos y decisiones previamente emitidos por éstos dentro de un litigio procesal, sin considerarse que medie recurso procesal o acción extraordinaria de protección [...] Que esta sección del proceso de evaluación desconoce que las actuaciones judiciales en sí misma*

⁹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 889-20-JP/21, párr. 118.

son valiosas e inmutables [...] Que el análisis realizado en el Proceso de Evaluación respecto de las decisiones jurisdiccionales [...] comprometen la independencia de los Jueces y Conjueces”.

32. Continuando con su análisis, señala que presentó una aclaración a la Corte Provincial sobre la supuesta vulneración a la independencia judicial y que la misma respondió a su solicitud conforme la Sentencia No. 37-19-IN y sus votos concurrentes. Sobre este punto, indica que dicha autoridad judicial *“cita constantemente la sentencia No. 37-19-IN/21 emitida por la Corte Constitucional; sin embargo, no acoge todos los argumentos esgrimidos por el máximo órgano de justicia constitucional y de una forma inmotivada resuelve la vulneración de derechos constitucionales sin especificar la vulneración en el caso específico de cada uno de los accionantes”*. Finaliza puntualizando que la Corte Constitucional determinó que la Resolución 10-2019 no vulneró, per se, el derecho a la independencia judicial, pero que la Corte Provincial resolvió aceptar la acción de protección y declarar la vulneración a derechos constitucionales.
33. Sobre los cargos expuesto, en primer lugar cabe señalar que la Corte Constitucional ha precisado que la inatención *“se produce cuando el razonamiento del juez ‘equivoca el punto’ de la controversia judicial”*¹⁰. Dicho de otra forma, conforme el artículo 76.7.1 de la Constitución, la argumentación jurídica supone que la explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho se refieran precisamente a la decisión que se busca motivar¹¹.
34. En la demanda objeto de análisis, los argumentos de la entidad accionante no están dirigidos a demostrar dicho vicio. Al contrario, se concentra en manifestar que, a su parecer, en el presente caso no existió vulneración de la independencia judicial, problema que fue objeto de la acción de protección, lo que no puede ser discutido nuevamente mediante una acción extraordinaria de protección.
35. Por el contrario, se observa que la decisión impugnada se especificó como uno de los argumentos de los actores en la acción de protección fue la vulneración a dicho derecho por tratarse de la desvinculación de jueces y conjueces de la Corte Nacional¹². Esto

¹⁰ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21, párr. 80.

¹¹ Ibidem, párr. 81.

¹² Sentencia de 30 de diciembre de 2021. “Una vez calificada la demanda, notificados los accionados se realizó la correspondiente audiencia oral, pública y de contradictorio el 29 de mayo del 2020 en la que intervino en representación de los accionantes el doctor David Alberto Cordero Heredia quien expuso que: (...) “se ha violado la independencia judicial al transgredir el Art. 8 y el Art. 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque los ciudadanos no tienen acceso a jueces imparciales,

llevó a que la autoridad judicial analizara dicho cargo y concluyera en el proceso llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura se vulneró la independencia judicial en el contexto del derecho al debido proceso¹³.

36. Cabe señalar, además, que la decisión de esta Corte Constitucional citada por la parte actora determinó que el procedimiento de evaluación no violó *per se* la independencia judicial. Lo que no entiende el Consejo de la Judicatura es que la naturaleza de acción pública de inconstitucionalidad no es la misma que la de una acción de protección. Que una norma no sea *per se* contraria a la Constitución implica que en criterio de cinco jueces de la Corte Constitucional (tres jueces presentaron voto concurrente) la norma no cruzó el umbral de ser incompatible **en abstracto** con la norma suprema. Eso no significa que la aplicación de esta norma en un caso concreto pueda generar violación de derechos fundamentales. La incompatibilidad en abstracto se estableció en la sentencia de

independientes, que puedan resolver sobre las violaciones a sus derechos, es por ello que es fundamental el pilar de la democracia de independencia judicial, y el respeto de las más altas cortes de país; este es un caso de independencia judicial que de acuerdo a la Corte Interamericana, en el caso *Camba Campos* se viola la inmovilidad de los jueces que es un principio básico de la independencia judicial; dice la Corte Interamericana que solamente se puede remover a los jueces por dos causas; primero una remoción por causales mediante un proceso disciplinario con todas las garantías del debido proceso legal y dice que los jueces solo pueden ser removidos por falta de disciplina grave o incompetencia, acorde a procedimientos justos que aseguren la imparcialidad y según la Constitución y la Ley; la segunda causal es la expiración del plazo por la cual ellos fueron designados y cabe la pregunta cuál el régimen constitucional de los accionantes que eran ex jueces y ex con juezas, ex con jueces y ex con juezas de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador”.

¹³ Sentencia de 30 de diciembre de 2021. “Del contenido de esta prueba documental se evidencia que operó la vulneración de la garantía de independencia judicial, esto conforme se establece de la jurisprudencia obligatoria de Corte Interamericana de Derechos Humanos que emana del caso *Quintana Coello vs. Ecuador*, que en el párrafo 194 expresa que: “*los funcionarios judiciales no serán destituidos del cargo o sometidos a otros procedimientos disciplinarios o administrativos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante una apelación o revisión de un órgano superior*”. De lo anterior, la aplicación de estos deméritos en el *Proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019* condujo a la imposición de una forma de sanción consistente en la remoción de Jueces y Conjueces Nacionales. Figura que no consta catalogada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por ello, se concluye que los parámetros de la evaluación contrariaron de forma directa a los pronunciamientos realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al disminuir las puntuaciones de los evaluados con base en el número de procesos que mediante acción extraordinaria de protección (irresoluta) fueron a la Corte Constitucional. Conforme el análisis que precede, los parámetros que han sido implementados para el *Proceso de evaluación realizado a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019*, son contrarios a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evidencia que tal proceso inició bajo la sugerencia intrusiva de otro poder o función del Estado que no guardaba relación con la entidad de justicia, fuera de los periodos para los que constitucionalmente fueron designados mediante concurso”.

inconstitucionalidad (37-19-IN) emitida por la Corte Constitucional, sin embargo, esta alta Corte no analizó los hechos referentes a la aplicación de la norma, por lo que mal habría hecho en pronunciarse sobre si el proceso de evaluación violó o no derechos fundamentales.

37. De lo expuesto, se puede observar claramente que dicho cargo se agota en lo injusto o equivocado que estuvo para el Consejo de la Judicatura el análisis realizado sobre la independencia judicial, sin que explique las razones por las cuáles se configuró el vicio de inatención. Es decir, la demanda incurre en el artículo 62 numeral 3 de la LOGJCC.
38. Finalmente, si la entidad accionante buscaba sostener una supuesta inobservancia de un precedente constitucional, debía presentar un argumento claro que i) identifique la regla de precedente y ii) las razones por las cuáles dicha regla era aplicable al caso¹⁴. Sin embargo, en el presente caso únicamente existen insinuaciones o afirmaciones que no permiten establecer la existencia de un argumento claro, lo cual además incumple también el artículo 62 numeral 1 de la LOGJCC.

IV. Consideraciones finales

39. Por todo lo antes expuesto, creemos importante que la Corte Constitucional declare inadmisibile la acción de protección presentada por el Consejo de la Judicatura.
40. Vemos con preocupación que varias instancias del Estado y en especial el Consejo de la Judicatura pretende desnaturalizar la Acción Extraordinaria de Protección. La AEP es una garantía jurisdiccional constitucional y, como tal, tiene como objetivo precautelar los derechos fundamentales de las personas reconocidas por la Constitución.
41. En la relación tripartita incluida en todo derecho fundamental, el estado es el sujeto obligado, la Constitución contiene la obligación y el sujeto provisto de dignidad humana es el titular del derecho. El debido proceso legal es un derecho de toda parte procesal, sin embargo, en su dimensión *iusfundamental* solo pertenece a los seres humanos.
42. Los procedimientos ordinarios prevén oportunidades suficientes para tutelar el derecho al debido proceso legal de las partes. Que se alegue la violación al derecho fundamental al debido proceso en una garantía debería estar mediado por requisitos esenciales como: a)

¹⁴ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1943-15-EP/21, párr. 42.

quien inicia la acción debe ser titular de un derecho fundamental; y b) la alegación de la violación al derecho al debido proceso debería superar la falta de cumplimiento de una solemnidad o formalismo procesal, sino que dicha violación debería afectar de forma clara y directa la posibilidad de la parte procesal de alcanzar los fines constitucionales del proceso judicial.

43. Respecto al primer punto, si bien esta Corte Constitucional ha establecido que las instituciones del Estado podrían presentar acciones extraordinarias de protección por el derecho al debido proceso, no se puede desconocer que el estándar debe ser mucho más alto. No puede ser suficiente, como ocurre en el presente caso, que el Consejo de la Judicatura ensaye un argumento de falta de motivación cuyo verdadero trasfondo es mostrar su inconformidad con una sentencia de garantía de derechos fundamentales. En este sentido, la Corte Constitucional ha llamado reiteradamente la atención a otras instituciones públicas por haber presentado esta acción sin fundamento y por constituirse en un posible abuso del derecho¹⁵.
44. Respecto del segundo punto, más allá de la inconformidad que tiene el Consejo de la Judicatura con la sentencia de la Corte Provincial, no esgrime de ninguna manera como dicha sentencia afecta el derecho al debido proceso. El Consejo de la Judicatura pudo defenderse en todo momento, inclusive incidentó repetidamente (presentó dos recusaciones) dentro del procedimiento ante la Corte Provincial, extendiendo así de forma excesiva un proceso que debía ser sencillo, rápido y eficaz. La segunda instancia duró más un año en resolverse, lo cual supera todos los plazos legales para una acción de protección.
45. De la revisión del sistema de la Corte se puede comprobar que el Consejo de la Judicatura ha presentado más de cien acciones extraordinarias de protección en contra de decisiones judiciales en donde se reconocían la violación de derechos de jueces, juezas y otros funcionarios de la Función Judicial¹⁶. Este abuso del derecho de acción por un ente que, además, no es titular de derechos fundamentales, perjudica a las víctimas quienes tienen que seguir invirtiendo tiempo y recursos en el litigio de sus causas a pesar de haber recibido una sentencia favorable, y perjudica también a toda la ciudadanía por ocupar el tiempo y recursos que la Corte Constitucional bien podría utilizar para desarrollar jurisprudencia

¹⁵ Por ejemplo, la Corte Constitucional llamó la atención a la SENAE por considerar a la AEP una instancia a agotar en todos los casos. Véase: Sentencia No. 1348-17-EP/21, párr. 35 y 36; Sentencia No. 136-17-EP/21, párr. 26; Sentencia No. 2609-16-EP/21, párr. 16; Sentencia No. 1770-17-EP/21, párr. 30; Sentencia No. 785-13-EP/19, párr. 18.

¹⁶ Revisión realizada en el buscador de causas de la Corte Constitucional.

vinculante que ayude a la ciudadanía a obtener tutela de sus derechos fundamentales en la justicia ordinaria.

V. Petición

46. Por lo antes expuesto, solicitamos que se inadmita la causa y que se aperciba a los abogados y las abogadas del Consejo de la Judicatura que presentaron esta acción.

VI. Representación y notificaciones

Designo como mis abogados en la presente causa a los abogados David Cordero Heredia, Niki Sánchez Barrezueta, Felipe Castro León y la abogada Diana Carrión Mera, para que con su sola firma, en conjunto o por separado, me representen en el trámite de la presente causa. Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en los casilleros judiciales electrónicos: David Cordero Heredia: 1715052492 , Niki Estéfano Sánchez: 1716212491, Felipe Castro León: 1804264461 y Diana Carrión Mena: 1717356222, y en los correos electrónicos davidcorderoheredia@hotmail.com, nikisanchez95@gmail.com, fcastroleon@gmail.com y di_carrion@outlook.com.

Firmo conjuntamente con nuestros abogados patrocinadores,

Dr. José Luis Terán Suárez

C.I. 1001335445

David Cordero Heredia. J.S.D.

Mat. Prof. 17-2009-79 F.A.

Abg. Niki Estéfano Sánchez.

Mat. Prof. 17-2019-614 F.A.

Abg. Felipe Castro León

Mat. Prof. 7-2016-492 F.A.

Abg. Diana Carrión Mena

Mat. Prof. 17-2020-342 F.A.